

Opinión

¿Formar ciudadanos? (IX)

Si un observador europeo leyera la sentencia de 11 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo (TS) sobre Educación para la Ciudadanía (EpC), su primera impresión sería posiblemente de perplejidad al constatar el revuelo causado por una enseñanza que se desenvuelve pacíficamente en muchos países de Europa (según Eurydice, esta asignatura se imparte en 22 Estados con una u otra denominación). En segundo lugar, se asombraría también de la alegación de adoctrinamiento formulada por un sector de la sociedad española (¿no es una falta de respeto hacia los profesores que, dentro de su libertad de cátedra, son responsables de su enseñanza?). Por último, si leyera los decretos de la LOE a este respecto, su sorpresa aumentaría al comprobar que apuntan a objetivos como “impulsar la autonomía personal”, “estimular el pensamiento crítico”, “entender la creciente pluralidad de las sociedades actuales” o “reflexionar críticamente” sobre los valores que la propia EpC quiere transmitir.

Probablemente nuestro observador europeo llegaría a la conclusión de que en el fondo de esta polémica late una notable inmadurez democrática que afecta a personas e instituciones que no acaban de aceptar el pluralismo político, social, cultural y religioso de la sociedad española. Sin embargo, esto es lo que en definitiva ha afirmado el TS al subrayar que el pluralismo es consustancial a la sociedad actual y que el pluralismo implica siempre “diversidad de concepciones [...] sobre la vida individual y colectiva”. Lo más significativo es que nuestro alto tribunal considera que es el sistema educativo quien debe transmitir “la realidad de esa diversidad”.

Por todo ello, si hay algo que reprocharle al Gobierno que ha impulsado la EpC es su extraordinaria timidez a la hora de asignar el horario lectivo mínimo. Basta una pura constatación aritmética: la EpC tiene adjudicada 50 horas en Primaria (la Religión, 315) y 70 horas en la ESO (la Religión, 175). ¿Podemos formar así a los demócratas de la próxima generación?

La pregunta es pertinente porque no hay democracia sin una nueva moral pública que la sustente, sin una moral pública asumida y vivida por los ciudadanos. Lo que ha sentenciado el TS es que corresponde al sistema educativo transmitir esa moral pública. A comentar este extremo dedicaremos la última columna de este curso.



MANUEL DE PUELLES
Catedrático emérito de Política
de la Educación (UNED)

LA PRENSA HA DICHO

Cuando se pierde el norte, cualquier camino es bueno. Desaprovechada la ocasión de hacer historia y de arreglar nuestro sistema educativo, nos dedicamos a los viejos asuntos accesorios cuyos tufos nos obnubilan, haciéndonos olvidar que, perdido el camino, estamos también perdiendo el tiempo. Así, cuando *EL PAÍS* recoge, todavía, manifestaciones de la familia de Najwa, la alumna que fue expulsada de un instituto por llevar *hiyab*, alguien (además del abogado que prepara la minuta) saca partido. Algo parecido acontece con la enseñanza de la lengua cuando *LA VOZ DE GALICIA* asegura que, tras tanto viaje y tan polémico, estamos con el decreto del gallego en “el mismo sitio” pero “ahora tenemos un grave problema que, lejos de afectar a las opciones y preferencias de algunos ciudadanos, afecta a la función de gobernar los intereses y patrimonios colectivos que está atribuida a la Xunta”. *ABC* sabe perfectamente que para usar la educación políticamente no hay más que airear la moral, cuando escribe: “en contra de los principios más elementales de la defensa de la vida humana, el Partido Socialista pretende ‘vender’ la nueva ley del Aborto como un éxito para los derechos de la mujer enviando ‘agentes de salud’ a las aulas para enseñar a los niños las grandes ‘ventajas’ de la doctrina gubernamental”. Mantengo comillas dentro de comillas.

Esther Vera decía en *EL PAÍS* que “la credibilidad de un país se construye sobre su situación económica, su competitividad, su nivel educativo, pero también sobre la estabilidad, el temple de sus representantes, su sensatez”. Lo que pasa es que, en vez de buscar conjuntamente una salida a la crisis, nuestros políticos andan a la greña. El martes 25 se montó una bronca en el Senado que daba vergüenza. En vez de solución, los políticos se han convertido en un problema, según manifiestan los ciudadanos en las encuestas. La imagen de corruptos, perpetuamente instalados en la bronca, está calando en la sociedad y la gente se aparta cada vez más de la política. *Zygmunt Bauman*, que ha recibido con *Alain Touraine* el premio Príncipe de Asturias, decía en *ABC* que en el mundo actual “todo es global, menos la política” y, analizando la relación entre el individuo y la sociedad, dice que nadamos como podemos en una sociedad “líquida” en la que “no hay grandes valores pero sí grandes declaraciones”.

Ángel Gabilondo presentó a los consejeros autonómicos una propuesta de 14 programas (articulados, según *LA RAZÓN*, en cinco grandes bloques: rendimiento, modernización del sistema, FP, evaluación y profesorado) que tendrán una aportación conjunta de 510 millones de euros en 2011. Quien lo vio dice que los consejeros aplaudían con las orejas, encantados de recibir dinero (con el que harán lo que quieren), en momentos en que a todo el mundo le quitan. No es extraño que desde el Ministerio se sientan “muy apoyados” por las instancias políticas. Sin embargo, el periodista de *ABC*, *Xavier Pericay*, no ve sentido a intentar sustituir el fracasado pacto político por un “acuerdo social” ya que “tanto los sindicatos de maestros y profesores como

las asociaciones de padres de alumnos, es decir, dos de los sectores pertenecientes al ámbito social con mayor peso en el campo educativo, están, por lo general, politizados (...) y pretender deslindar lo social y lo político como si se tratara de compartimentos estancos resulta tan ilusorio como falaz (...). La propuesta del Ministerio no incluye nada que pueda agrupar a los españoles en torno a un proyecto compartido. O, si lo prefieren, nada que pueda contrariar de algún modo a los nacionalismos periféricos”.

El estado de las autonomías nos cuesta mucho dinero y muchos de los recortes deberían empezar por allí, sin distinción de signo político. *EL PAÍS* da un ejemplo: las tres diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales valencianas, con 178 cargos electos, cuentan con 294 asesores que cuestan unos 12,2 millones a las arcas públicas. En *EL PERIÓDICO DE CATALUNYA*, *Serra Ramoneda* aseguraba que ha habido un gigantesco despilfarro de recursos que, de haberse invertido mejor, restarían violencia a la crisis que nos azota: “¿Cuántos metros cuadrados de edificios universitarios nos hubiéramos podido ahorrar vista la escasa ocupación que presumiblemente iban a tener?”. *José Carlos Bermejo* denunciaba en *LA VOZ DE GALICIA* la implantación acelerada de los másteres “con el fin de recaudar cada vez más dinero y de conseguir un supuesto prestigio cosmopolita que deriva de tener un título” e *Ignacio Ruiz* ridiculizaba en *ABC* ‘Cómo estudiar inglés con Zapatero’, concluyendo así el artículo: “para que los dineros públicos vuelvan aún más tonto al hombre estúpido”. Se van a recortar las ayudas al comedor y algo parecido pasará con los libros y puede que con los ordenadores del programa Escuela 2.0, que -dicho sea de paso- hubiera sido más razonable y barato mandar en vez de a los alumnos a los centros, porque se controlarían mejor y harían falta muchos menos.

Como muestra de que todo puede empeorar está el hecho de que además de la crisis tengamos que soportar las presuntas soluciones y que, además de la aparente inutilidad de la política para arreglar la economía, hayamos de sufrir el estilo (estilete, o mejor, cuchillo de carnicero) de quienes quieren hacer el mondongo a costa de los que ya están flacos. En plena crisis, a falta de pactos, vengan recortes y huelgas.



JOSÉ MANUEL PÉREZ
Catedrático de Instituto

“En vez de buscar conjuntamente una salida a la crisis, nuestros políticos andan a la greña”

Cartas al Director

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS SIN PLAZA ESCOLAR

La alarma saltó al revisar las listas provisionales de admisión de los niños en los diferentes centros educativos, cuando dichos centros educativos solicitados por los padres contestaron negativamente las solicitudes de casi 300 niñas y niños de Carabanchel Alto y del PAU de Carabanchel.

Ante esta situación, ocasionada principalmente por el elevado índice de natalidad en el nuevo desarrollo del PAU y la escasez de infraestructuras escolares, los padres están comenzando a recoger firmas para que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid resuelva este problema.

Puestos en contacto representantes de la Asociación de Vecinos con la Consejería de Educación, se ha concertado una entrevista con el viceconsejero de Organización Educativa el martes 1 de junio.

Se da la circunstancia de que la Comunidad planificó en su momento la construcción de 4 nuevos colegios educativos en el nuevo PAU (2 concertados y 2 públicos), de los que se han levantado los dos concertados y uno público. Por tanto, es

imprescindible la construcción de, al menos, el colegio público que falta, y los que sean necesarios para absorber la demanda generada en el barrio por los nuevos vecinos. Los resultados de la reunión serán conocidos por los vecinos en una asamblea que tendrá lugar el próximo domingo 6 de junio.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO
PLATAFORMA PAU CARABANCHEL

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

El desarrollo del Plan Bolonia en Europa no debe ser excluyente para España en cuanto a sus relaciones con las universidades iberoamericanas. En esta semana se celebra en Guadalajara, México, el II Encuentro Internacional de Rectores Universia, en el que se dan cita un millar de rectores de todo el mundo. Según datos del curso 2005-2006 Iberoamérica contaba con casi 20.000.000 de alumnos y alumnas en lo estudios superiores, que incluyen los de España y Portugal. Un potencial nada despreciable que tiene que empezar a hacer oír su voz en los foros políticos y econó-

micos internacionales donde, muchas veces, se deciden las tendencias educativas más importante para la enseñanza superior.

Iberoamérica necesita participar de proyectos comunes, fundamentados en políticas compartidas y esfuerzos en la inversión compartidos y solidarios, a los que aporte más el que más tiene. Como integrantes de una misma cultura y una misma lengua tenemos que creer más en nosotros mismos. Tenemos que creer y trabajar por un Espacio Iberoamericano de Enseñanza Superior como motor de mejora social. ¿Cómo superar las carencias y las diferencias que existen entre los distintos países? A través de la cooperación solidaria en torno a un proyecto de universidad que nos una aún más política, social, económica y culturalmente. España y Portugal tienen un importante papel que jugar; y una importante experiencia que aportar como miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Por una Universidad Iberoamericana.

JUAN JOSÉ LÓPEZ. Docente